

Santiago, dieciséis de abril de dos mil veinticinco.

VISTOS:

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota, por sentencia de veinte de diciembre de dos mil veintitrés, condenó al acusado Fernando Albino Ponce Torres a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, multa de diez unidades tributarias mensuales y accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras dure la condena, como autor del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, previsto y sancionado en los artículos 1° y 3° de la Ley N° 20.000, cometido el día 8 de junio de 2023, en la comuna de La Ligua.

El fallo sustituye la pena por libertad vigilada intensiva por el mismo tiempo de la condena.

La defensa del acusado dedujo recurso de nulidad, el que fue admitido a tramitación, celebrándose la audiencia para su conocimiento el veintisiete de marzo pasado, según da cuenta el acta suscrita en esa misma oportunidad.

Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de nulidad esgrime como única causal la establecida en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, al haberse quebrantado el derecho a un procedimiento e investigación racional y justo y el derecho a la libertad personal, lo anterior, debido a la realización de diligencias policiales desarrolladas al margen de la ley.

Explica que Carabineros recibió una denuncia informando que había un sujeto merodeando en el sector, así como que evitaba el control policial, la que no fue puesta en conocimiento del Ministerio Público conforme al artículo 84 del Código Procesal Penal, norma que exige expresamente la dirección de esa



institución en la investigación penal, por lo que los funcionarios policiales actuaron en forma autónoma.

Agrega que también se infringió el artículo 85 del mismo cuerpo legal, desde que el hecho que fundó el control de identidad consistió en que una persona estaba estacionada en una calle, lo que no constituye un indicio suficiente para realizar esa diligencia.

Explica que se desprende del testimonio del funcionario policial Sergio Eduardo Aedo Poblete, que el indicio para realizar el control de identidad fue ver un vehículo estacionado, circunstancia que no reúne los requisitos de seriedad y verosimilitud exigidos por el artículo 85 del Código Procesal Penal, constituyendo una conducta neutra y permitida por el legislador, no pudiendo ser complementada por el contenido de la denuncia anónima recibida, pues es subjetiva.

Por ello, solicita se acoja el recurso interpuesto, se anule el juicio y la sentencia impugnada, debiendo excluir toda la prueba de cargo por ser ilícita, determinando el estado del procedimiento y remita los antecedentes al tribunal no inhabilitado para que disponga la realización de una nueva audiencia de juicio oral.

Segundo: Que la sentencia impugnada, en su basamento octavo, tuvo por acreditado el siguiente hecho: *“El día 8 de junio de 2023, alrededor de las 17:15 horas, personal de Carabineros de la Sección OS-7 Aconcagua, realizaban controles vehiculares selectivos en el sector conocido como “Guindo Chico”, comuna de La Ligua, y fiscalizaron el vehículo marca BMW, modelo 325i, patente única BZYL-80, y al acercarse y solicitar la documentación respectiva, sorprendieron al conductor, el FERNANDO ALBINO PONCE TORRES, transportando en el asiento trasero del móvil, al interior de un saco*



de color blanco dos paquetes envueltos en alusa, además de mantener en una de sus manos una bolsa de color negro de nylon, los que contenían en total de 1 kilo 433 gramos netos de sumidades floridas de cannabis sativa.” (sic)

Estos hechos fueron calificados como un delito consumado de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 3° en relación con el artículo 1° de la Ley N° 20.000.

Tercero: Que, en lo concerniente a la infracción denunciada por el recurso de nulidad, cabe indicar que el debido proceso es un derecho asegurado por la Constitución Política de la República y que consiste en que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y al efecto, el artículo 19, N° 3, inciso sexto, confiere al legislador la misión de definir las garantías de un procedimiento racional y justo.

Sobre los presupuestos básicos que tal garantía supone, se ha dicho que el debido proceso lo constituyen a lo menos un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Chile que están en vigor y las leyes les entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley y que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas.

Cuarto: Que, en otro orden de consideraciones, en cuanto a las facultades autónomas de actuación que la ley le entrega al personal policial, así como lo referido al respeto del debido proceso y la libertad personal, esta Corte Suprema ha señalado reiteradamente que la negativa a admitir prueba ilícita tiene como fundamento la concepción del proceso como instrumento de



resolución jurisdiccional de litigios dentro del ordenamiento jurídico, lo que conduce a que todo acto que infrinja de manera sustancial dicho sistema debe ser excluido del mismo.

Quinto: Que, en relación con las normas de procedimiento aplicables al caso concreto, resulta necesario proceder a su análisis a efectos de poder determinar si ellas han sido transgredidas y, en su caso, examinar si dicho quebrantamiento ha significado la vulneración de los derechos fundamentales del acusado, como denunció su defensa.

Sexto: Que como se ha dicho en ocasiones anteriores por esta Corte, el Código Procesal Penal regula a lo largo de su normativa las funciones de la policía en relación con la investigación de hechos punibles y le entrega un cierto nivel de autonomía para desarrollar actuaciones que tiendan al éxito de la investigación.

Tal regulación, en todo caso, contempla como regla general que su actuación se encuentra sujeta a la dirección y responsabilidad de los representantes del Ministerio Público o de los jueces (Sentencias Corte Suprema Roles N° 7178-17, de 13 de abril de 2017; N° 9167-17, de 27 de abril de 2017; N° 20286-18, de 01 de octubre de 2018; N° 28.126-18, de 13 de diciembre de 2018 y N° 13.881-19, de 25 de julio de 2019).

Es así como el artículo 83 del citado cuerpo normativo establece expresamente el marco regulatorio de la actuación policial sin orden previa o instrucción particular de los fiscales permitiendo su gestión autónoma para prestar auxilio a la víctima (letra a); practicar la detención en casos de flagrancia conforme a la ley (letra b); resguardar el sitio del suceso con el objeto de facilitar la intervención de personal experto de la policía, impedir la alteración o eliminación de rastros o vestigios del hecho, etcétera, (letra c);



identificar testigos y consignar las declaraciones que ellos presten voluntariamente, tratándose de los casos de las letras b) y c) citadas (letra d); recibir las denuncias del público (letra e) y efectuar las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales (letra f).

Sólo en las condiciones que establece la letra c) recién citada, el legislador autoriza a los funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile a efectuar diligencias autónomas de investigación.

A su vez, los artículos 85 y 86 del Código Procesal Penal regulan el procedimiento de control de identidad, estableciendo la facultad de los funcionarios policiales para solicitar la identificación de cualquier persona sin orden previa de los fiscales, en los casos fundados en que estimen que exista algún indicio de que aquella hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; de que pudiese suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; en el caso que la persona se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad; facultando para el registro de vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, procediendo a su detención, sin necesidad de orden judicial, de quienes se sorprenda a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130 –que describe lo que debe entenderse por situación de flagrancia– así como de quienes, al momento del cotejo, registren orden de aprehensión pendiente.

Séptimo: Que las disposiciones recién expuestas tratan, entonces, de conciliar una efectiva persecución y pesquisa de los delitos con los derechos y garantías de los ciudadanos, estableciéndose en forma general la actuación subordinada de los entes encargados de la ejecución material de las órdenes de indagación y aseguramiento de evidencias y sujetos de investigación al



órgano establecido por ley de la referida tarea, los que a su vez actúan conforme a un estatuto no menos regulado –y sometido a control jurisdiccional– en lo referido a las medidas que afecten los derechos constitucionalmente protegidos de los ciudadanos.

Octavo: Que a fin de dirimir lo planteado en el recurso, es menester estarse a lo asentado por los jueces de la instancia al ponderar las evidencias aportadas a la litis, sin que sea dable que, para tales efectos, esta Corte Suprema, con ocasión del estudio de la causal de nulidad propuesta, intente una nueva valoración de esas probanzas y fije hechos distintos a los determinados por el tribunal del grado, porque ello quebranta de manera evidente las máximas de oralidad, inmediación y bilateralidad de la audiencia, que rigen la incorporación y valoración de la prueba en este sistema procesal penal.

Aclarado lo anterior, se procederá al estudio de las protestas fundantes del recurso con arreglo a los hechos que en la decisión se tienen por demostrados.

Noveno: Que, respecto al defecto de nulidad resulta relevante señalar que la sentencia impugnada consignó los presupuestos de hecho que se tuvieron como establecidos, consistentes en que el día 8 de junio de 2023, alrededor de las 17:15 horas, funcionarios de Carabineros de la Sección OS.7 de Aconcagua, mientras efectuaban controles vehiculares, recibieron denuncias de personas que circulaban por el lugar, las que consistían en que había un automóvil estacionado en un costado, con vidrios polarizados, y al acercarse al móvil, se percataron que no tenía su placa patente a la vista, por lo que procedieron a controlar a su conductor y registrar el automóvil, encontrando en el asiento trasero del vehículo, en el interior de un saco, dos



paquetes envueltos en *alusa* que contenía cannabis sativa, sustancia que también estaba en una bolsa de nylon que mantenía el acusado en su mano.

Décimo: Que, en la especie, la defensa del recurrente ha cuestionado el actuar de los funcionarios policiales, toda vez que estima que al practicarse un control de identidad a su representado sin que existiera indicio para ello, procedieron de manera autónoma en un caso no previsto por la ley, lo que implicaría que todas las pruebas derivadas de tales diligencias son ilícitas, y, por ende, debieron ser valoradas negativamente por los juzgadores de la instancia.

Undécimo: Que, en lo que interesa al recurso de nulidad en análisis, cabe recordar que el artículo 4 de la Ley N° 18.290, autoriza a Carabineros para supervigilar el cumplimiento de las disposiciones que dicha ley establece. De esta forma, resulta claro que Carabineros se encuentra facultado para requerir la documentación de un móvil en el marco de un control de tránsito en la vía pública.

Es en ese control vehicular cuando aparece el indicio que permite llevar a cabo un control de identidad a su ocupante, consistente en la observación por parte de los agentes policiales que el vehículo, que se encontraba estacionado, no contaba con su placa patente; desplegándose en consecuencia las facultades autónomas previstas en el artículo 85 del Código Procesal Penal, por medio de las que se permite a los funcionarios policiales proceder al registro de las vestimentas, equipaje y vehículo de la persona cuya identidad se controla, cuando según las circunstancias se estimare que se ha cometido un crimen, simple delito o falta o se dispusiere a su comisión, entre otras hipótesis, toda vez que, como ya se desprende de los hechos que los jueces del Tribunal de Juicio Oral han tenido por acreditados, fue con ocasión



de dicha actividad fiscalizadora que los funcionarios policiales observaron un saco en el asiento trasero del automóvil que revisaron, que contenía dos paquetes de cannabis sativa, misma sustancia que se le encontró en una bolsa que el imputado mantenía en sus manos, lo que permitió que estuvieran en condiciones de presumir fundadamente que el acusado estaba cometiendo un delito.

Duodécimo: Que, en consecuencia, al proceder del modo que lo hicieron los funcionarios policiales no transgredieron en el caso concreto las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico y, por lo tanto, no han vulnerado las normas legales que orientan el proceder policial como tampoco las garantías y derechos que el artículo 19 de la Constitución Política de la República reconoce y garantiza a los imputados, por lo que los jueces del tribunal de juicio oral no incurrieron en vicio alguno al aceptar con carácter de lícita la prueba de cargo obtenida por la policía en las referidas circunstancias y que fuera aportada al juicio por el Ministerio Público, de manera que no queda sino rechazar el recurso en análisis.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 372, 373 letra a) y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la defensa del acusado Fernando Albino Ponce Torres contra la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota el veinte de diciembre de dos mil veintitrés, en la causa RUC N° 2300628972-k, RIT N° 201-2023, y el juicio oral que le precedió, los que, por ende, **no son nulos**.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora Letelier.

Rol N° 82-2024.



Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., las Ministras Sras. María Teresa Letelier R. y María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavorari G. No firma el Ministro Sr. Valderrama, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar con permiso. Santiago, 16 de abril de 2025.



En Santiago, a dieciséis de abril de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

